



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta de enero de dos mil veintitrés

A22-297

ASUNTO: APELACIÓN AUTO – ordinario laboral
DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO MONTOYA CASTAÑO
DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS S.A.S.
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S. (E & D S.A.S.)
RADICADO: 05001-31-05-013-2021-00305-01
DECISIÓN: CONFIRMA auto que niega intervención de un tercero
Link: [22-297 \(013-2021-00305\) auto](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la parte actora contra la decisión emitida el 28 de octubre de 2022 mediante la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín decidió desfavorablemente la solicitud elevada por la parte actora tendiente a obtener la intervención de un tercero.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 2** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que tras declararse la existencia de una relación laboral con la sociedad CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS S.A.S., se condene a esta en calidad de empleador, y solidariamente a ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. como beneficiario de la obra, a reconocer y pagar lo siguientes conceptos: indemnización por despido sin justa causa de acuerdo a lo previsto en el art. 64 del CST; cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicios por el período comprendido entre el 4 de enero y el 6 de julio de 2018; indemnización por falta de pago contemplada en el art. 65 del CST y las costas del proceso. Aduce que NO recibió en forma completa los haberes a los que tenía derecho mientras prestó sus servicios

como vigilante en el proyecto inmobiliario Ciudadela Oporto, ubicado en el barrio Cabañas del municipio de Bello – Antioquia.

En auto del 10 de agosto de 2021 se admitió la demanda contra las sociedades en mención. Surtido el trámite de notificación, mediante auto del 23 de noviembre de la misma anualidad, se dispuso lo siguiente:

“(…) teniendo en cuenta el escrito de contestación de la demanda allegado por ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS, cumple con los requisitos del artículo 18 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se da por contestado el mismo.

Respecto a la demandada CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS SAS pese a que el despacho notificó en debida forma el auto admisorio de la demanda al canal digital elkingoezeyj@hotmail.com, conforme lo establece el Decreto 806 de 2020 y se dejó constancia de recibo del servidor como lo dispuso la Sentencia C420 de 2020, la pasiva NO HIZO pronunciamiento alguno. Así las cosas, se da frente a este por NO contestada la demanda”.

Al contestar la demanda la sociedad ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS negó la existencia de una relación contractual con la co-demandada y aclaró que si bien pertenecía al consorcio ENKI, lo cierto es que era una persona jurídica totalmente diferente, siendo aquel consorcio el constructor del proyecto Oporto. Que en tal sentido, no le constaban ninguno de los hechos y por ello NO allegaría copia del o los contratos comerciales relacionados con el mencionado proyecto.

Dicho escrito fue enviado al despacho el 22 de septiembre de 2021, e-mail que también fue dirigido al correo que el apoderado del demandante suministró para efecto de notificaciones.

El 10 de marzo de 2022 el juzgado fijó fecha para celebrar la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y la SS, para el día 4 de octubre del mismo año.

El 15 de marzo de 2022 la parte actora solicitó, entre otras, que se vinculara como demandado al CONSORCIO ENKI. Mediante auto del 18 del mismo mes y año, el despacho decidió que previo a resolver, oficiaría a las demandadas para que remitieran la documentación solicitada. Al NO mediar pronunciamiento, el 6 de septiembre de 2022 el despacho dio inicio al proceso sancionatorio.

Mediante memorial del 12 de septiembre de 2022, la sociedad ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S., allegó documento denominado *acta de conformación del consorcio* constituido con INVERSIONES KAM S.A.S. Además expuso que:

“(…) me permito dar respuesta al requerimiento realizado por el despacho donde solicita que se alleguen con las respectivas contestaciones de demanda por parte de las accionadas, copias de el o los contratos comerciales suscritos entre las demandadas, relacionadas con la construcción del proyecto inmobiliario Ciudadela Oporto y copia de los documentos modificatorios, actas de terminación y actas de liquidación de dichos contratos.

Considero necesario anunciarle al despacho que tal como se expuso en la contestación de la demanda por parte de la sociedad ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S, dicha sociedad NO sostuvo relaciones contractuales con la sociedad construcciones y concretos Aliadas S.A.S para el desarrollo del proyecto inmobiliario Ciudadela Oporto y la entidad constructora del proyecto inmobiliario anteriormente referenciado es el CONSORCIO ENKI.

Adicional a lo anterior considero pertinente anunciarle al despacho que tanto E y D S.A.S, como el consorcio ENKI, debieron cerrar sus oficinas definitivamente y toda la documentación perteneciente a estas sociedades se encuentra almacenada en bodegas y se desde el momento del requerimiento se inició la búsqueda de la información correspondiente, pero no ha sido posible su localización hasta el momento, solo se pudo ubicar el documento de conformación el consorcio ENKI, el cual se anexara con el presente memorial; razón por la cual le solicito al despacho que me conceda un plazo adicional para continuar con la búsqueda de los documentos solicitados”.

El 28 de septiembre de 2022, la parte actora solicitó la vinculación al proceso del CONSORCIO ENKI y a la sociedad INVERSIONES KAM S.A.S. Advirtió que desconocía su existencia por lo no elevó tal petición en etapa procesal anterior.

El 28 de octubre de 2022 la a quo resolvió desfavorablemente dicha súplica, decisión contra la cual la parte actora interpuso y sustento recurso de reposición y subsidiariamente apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

Tras destacar lo acontecido en el trámite, y precisar que la demanda se dirigió contra persona diferente a la que ahora se pretendía integrar, señaló que NO encontraba mérito para ordenar la vinculación del consorcio a la parte pasiva de la presente Litis, máxime los esfuerzos infructuosos por esclarecer su relación contractual con la codemandada CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS S.A.S, pues habiendo oficiado a ambas entidades del extremo pasivo para que aportaran los contratos comerciales relacionados con la construcción del Proyecto Inmobiliario Ciudadela Oporto, ninguna de ellas aportó información relevante al respecto, limitándose ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. a remitir únicamente el acuerdo de integración del consorcio e indicar que continuaría en la búsqueda de la documental solicitada.

Que adicionalmente, conforme lo había decantado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, los beneficiarios de la obra o deudores solidarios no se consideraban litisconsortes necesarios de la parte pasiva si estaba en discusión la declaración de las obligaciones laborales, aunado a que

para resolver las pretensiones principales del litigio (declaración de la existencia del contrato de trabajo con CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS S.A.S.), no se requería la comparecencia del presunto beneficiario de la obra o deudor solidario, pues nada impedía que, emitiéndose una condena en este proceso, el demandante pudiera pretender la declaración de solidaridad de forma posterior en otro litigio.

Añadió que la parte actora tampoco reformó la demanda, pese a que tuvo conocimiento oportuno del pronunciamiento efectuado por la sociedad ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S, quien anunció al CONSORCIO ENKI como verdadero responsable de la construcción del proyecto inmobiliario “Ciudadela Oporto”, pues dicha contestación fue remitida de forma simultánea al correo electrónico del apoderado.

Dichos argumentos fueron reiterados por el despacho el 4 de noviembre de 2022 al resolver negativamente el recurso de reposición.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDANTE

Resaltó que su intención, desde el inicio del proceso, siempre ha sido obtener declaratoria de solidaridad respecto del beneficiario de la obra.

Igualmente considera que la demandada Estructuración y Desarrollo de Proyectos S.A.S. se está valiendo de su propia negligencia y deslealtad procesal para obtener una decisión favorable, cual es la negativa a conformar el contradictorio con el Consorcio Enki, del cual es consorciada, situación por la cual resultaba inaceptable que adujese no tener en su poder los documentos solicitados en la demanda, insistiendo que la renuencia a aportarlos NO debía beneficiarla, ni favorecer su posición procesal, debiendo continuarse adelante con el trámite sancionatorio.

Consideró importante destacar que el que fuera el empleador, esto es, la sociedad Construcciones y Concretos Aliadas S.A.S. ni siquiera acudió a contestar la demanda y probablemente, no tendrá capacidad económica para asumir las condenas del proceso. Que por el contrario, era de esperarse que los constructores beneficiarios de la obra, tuvieran una capacidad mayor de asumir dicha responsabilidad, encontrándose con el agravante que las sociedades que conformaban el consorcio, en palabras de la co-de mandada, *habían cerrado sus puertas definitivamente*, expresión que no era exacta pero que dejaba entrever un serio riesgo de que tampoco se aprestaran a cumplir las condenas del proceso, máxime si ello implicase promover un proceso posterior para obtener la declaratoria de solidaridad para el beneficiario de la obra.

De otro lado, arguye que comprende la diferenciación entre un litisconsorcio facultativo y el necesario, en que cimentó el despacho su decisión de negar la vinculación del Consorcio Enki. No obstante, solicita se tenga en cuenta la protección de los derechos sustanciales del trabajador, que se pueden ver seriamente menoscabados en caso de que en este proceso se obtenga una condena que resulte imposible de cobrarse efectivamente.

2.3. ALEGATOS PARTE DEMANDANTE

En similares términos a los esbozados en el recurso de alzada, indicó que:

Considero de la mayor relevancia fijar la atención del debate que nos convoca, en dos asuntos fundamentales: en primer lugar, que ha sido la intención de esta parte demandante obtener una declaratoria de solidaridad respecto del beneficiario de la obra, desde el inicio del proceso y; que la demandada Estructuración y Desarrollo de Proyectos S.A.S. se está valiendo de su propia negligencia y deslealtad procesal para obtener una decisión favorable, cual es la negativa a conformar el contradictorio con el Consorcio Enki, del cual es consorciada.

Sobre el primero de los puntos, el suscrito apoderado ha demostrado en el transcurso del proceso su interés en dirigir la demanda hacia el beneficiario de la obra, lo cual queda evidenciado en la reclamación previa que se le formulara a E&D S.A.S. antes de la interposición de la demanda, así como los argumentos esgrimidos en el libelo introductorio, así como el objetivo de los testimonios que se llevarán al proceso. Es importante destacar que el que fuera el empleador de mi representado, esto es, la sociedad Construcciones y Concretos Aliadas S.A.S. ni siquiera acudió a contestar la demanda y probablemente, no tendrá capacidad económica de asumir las condenas del proceso. Por el contrario, es de esperarse que los constructores beneficiarios de la obra, tengan una capacidad mayor de asumir dicha responsabilidad. Pero aun así, como lo mencionara E&D S.A.S. en respuesta a requerimiento formulado por el Despacho, las sociedades que conforman el Consorcio Enki han cerrado sus puertas definitivamente, expresión que no es exacta respecto de su situación jurídica actual, pero que deja ver un serio riesgo de que tampoco se apresten a cumplir las condenas del proceso, máxime cuando ello implique promover un proceso posterior para obtener la declaratoria de solidaridad para el beneficiario de la obra.

Debo indicar, con todo respeto, que no puede ser aceptable que E&D S.A.S. no tenga en su poder los documentos solicitados en la demanda, teniendo en cuenta que esta sociedad es parte del Consorcio Enki, tal y como consta en el documento de conformación por ellos enviado. Como lo mencioné previamente, la renuencia a aportar los documentos solicitados en la demanda ha logrado favorecer la posición procesal de esta demandada. Por esta razón, solicito comedidamente al Despacho, seguir adelante con el trámite sancionatorio que se estaba promoviendo por no cumplimiento de lo requerido por esa agencia judicial.

Comprendo que los argumentos esbozados en el auto que se recurre, estriban en la diferenciación que se hace entre el litisconsorcio facultativo y el necesario y que fueron estos los que llevaron a adoptar la decisión de negar la vinculación del Consorcio Enki, sin embargo, en esta oportunidad, quiero plantear específicamente la protección de los derechos sustanciales de mi prohijado, que se pueden ver seriamente menoscabados en caso de que en este proceso se obtenga una condena que resulte imposible de cobrarse efectivamente.

En dichos términos solicita se revoque el auto impugnado y en su lugar, se integre al Consorcio Enki al contradictorio.

3. CONSIDERACIONES:

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 65 del C.P.T y la SS, es apelable el auto que rechace la representación de una de las partes o *la intervención de terceros*.

Y es precisamente lo que pretende el recurrente, concretamente que se admita como demandado a persona diferente a la que primigeniamente se dirigió la acción, concretamente al CONSORCIO ENKI. Ahora, inicialmente la solicitud también comprendía a la sociedad INVERSIONES KAM S.A.S. No obstante, en el recurso de alzada la parte NO insiste en ello. Pero en todo caso, aunque su disenso realmente estribara en obtener la vinculación de ambas personas jurídicas, a igual conclusión llegaría la Sala en torno a confirmar la decisión proferida en primera instancia.

Dos son las razones que llevan a esta Magistratura a adoptar tal postura. Veamos:

- ✓ Razón le asiste a la a quo en torno a que ni el CONSORCIO ENKI, ni la sociedad INVERSIONES KAM S.A.S. ostentan la calidad de Litis consortes necesarios por pasiva.

Sabido es que las normas contenidas en el código que rige el procedimiento laboral no regulan expresamente el asunto ahora debatido. En tal sentido nos debemos remitir a lo que en esta materia prevé el Código General del Proceso a través de la definición traída por el artículo 61 sobre la figura procesal del litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, que en lo que interesa a la Sala reza:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.”

La figura entonces propone para su procedencia que desde el principio de la litis se vislumbre un nexo jurídico que une a varios sujetos por activa, por pasiva o ambos, en un mismo acto o relación material única e indivisible, siendo imperiosa la comparecencia de todos para una mayor claridad en cuanto a los supuestos fácticos y en aras de establecer el grado de responsabilidad que compete a cada uno, garantizando principalmente los derechos al debido proceso y de contradicción, garantizando una adecuada aplicación de la justicia evitando decisiones inhibitorias.

Así pues, la figura se estructura cuando la relación de derecho sustancial sobre la cual debe pronunciarse el Juez está integrada por una pluralidad de sujetos en **tal forma que no puede escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente existan**, unicidad ésta que impide hacerle modificaciones.

La Corte Suprema de Justicia, de vieja data, estableció que cuando la sentencia haya de ser única y de idéntico contenido para la pluralidad de partes en la relación jurídico–procesal por ser única la relación material que en ella se controvierte, se configurara un litisconsorcio necesario; dicho órgano también afirmó que su conformación podía obedecerá lo dispuesto en la ley en casos precisos o bien a la naturaleza de la relación jurídica sustancial que da lugar al litigio analizando si la misma está conformada por un número plural de sujetos que no sea susceptible de escindirse *en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan sino que se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos*. En tales eventos solo es dable dictar sentencia de fondo si todos y cada uno de los mismos se vincula al juicio.

Otros doctrinantes relacionan que esta figura procesal se encuentra regida por dos principios: el de dispositividad y el de legitimación, y los expresan de la siguiente manera:

“La compaginación de los dos principios enunciados, arroja el simple resultado: en las relaciones sustantivas, jurídicamente una con sujeto múltiple, cuando la ley no dispone de otra cosa, es siempre lícito obrar por sí solo, sea para demandar o para resistir a la pretensión, y solamente en el caso de que el proceso tenga por fin, la sentencia constitutiva o modificativa o extintiva y tal vez hasta la mero declarativa siendo entonces un proceso definitorio, el principio de la legitimación, como exigencia de conformidad de la pretensión procesal con la manera de ser plural-única o compleja única, predomina sobre el de la libertad y tiene que conformarse la pretensión o la resistencia con la integración de la parte mancomunada: la presencia de todos los varios uno, simultáneamente: la comunidad, la sociedad, el matrimonio, la filiación, la deliberación, la propiedad, son relaciones que no pueden cesar o mortificarse, sino con respecto a todos sus titulares.”¹

Es decir, la figura del litis consorcio necesario se define como la obligatoriedad de vincular a todas las personas a las que afecten directamente las resultas de una sentencia, pues comparten entre sí un derecho sustancial que no puede ser dividido o escindido, por lo que sin su comparecencia no se puede proferir decisión de fondo.

En tal sentido, descendiendo al caso puesto en consideración de la Sala, encontramos que la ausencia de quienes eventualmente podrían estar llamados a responder solidariamente, NO impide al operador jurídico resolver sobre el fondo del proceso, es decir, establecer si CONSTRUCCIONES Y

¹ Quintero, Beatriz y Prieto Eugenio, “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis SA, Tercera Edición, Bogotá Colombia, 2000. Pág. 395.

CONCRETOS ALIADAS S.A.S. ostentó la calidad de empleador y si adeuda alguno de los haberes o indemnizaciones deprecadas.

Incluso, si miramos con detenimiento el recurso de alzada, puede apreciarse, por lo menos en este aspecto, un grado de conformidad del recurrente con los argumentos que esbozó la juez, pues el apoderado de la parte actora expresamente indica que comprende la diferenciación que se hace entre el litisconsorcio facultativo y el necesario, pero reitera su pedimento amparándose en *la protección de los derechos sustanciales*, aduciendo que podían verse seriamente menoscabados en caso de que se obtenga una condena que *resulte imposible cobrarse*.

Sin embargo, la falencia en la que se incurrió al momento de ejercer el derecho de acción, NO está llamada a sanearse en cualquier momento procesal, precisamente existen unas formas en cada juicio, y su estricto cumplimiento también propende por la materialización del derecho al debido proceso entendido como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a aquellas formas. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra, indicando entre otros conceptos que éste se aplicará a toda clase de actuaciones, es decir, judiciales y administrativas. Es por ello que las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos, quedando obligados por las normas que regulan el juicio o la actuación sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables.

En este orden de ideas, el desconocimiento que tuviese el actor respecto de los constructores y/o reales beneficiarios de la obra para la cual prestaba sus servicios, afincado además en el silencio de quienes ningún pronunciamiento hicieron frente a la reclamación que previamente radicase, cesó el 22 de septiembre de 2021 cuando la sociedad ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. contestó la demanda y dirigió tal escrito no sólo al e-mail del despacho, sino también al del apoderado de la parte actora, referenciado para efecto de notificaciones en la demanda.

Así las cosas, aquel era el momento para redirigir la acción a través de la forma prevista por el legislador, es decir, la REFORMA A LA DEMANDA, lo que comporta el segundo de los aspectos en

que esta Magistratura soporta su apego al razonamiento de la primera instancia, como a continuación se expondrá.

- ✓ NO se reformó oportunamente la demanda.

Frente al tema el CPT y la SS señala que:

ARTÍCULO 28. DEVOLUCIÓN Y REFORMA DE LA DEMANDA. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale.

La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvencción, si fuere el caso.
(Resaltos de la Sala)

Quiere ello decir que tras la contestación de la demanda, hecho que aconteció el 22 de septiembre de 2021, el reclamante NO sólo tuvo conocimiento de la existencia de una persona jurídica que posiblemente podría tener algún grado de responsabilidad de cara a la súplica impetrada, sino que además se abrió la posibilidad legal de vincularlo **dentro del plazo** estipulado por el legislador a través de la figura de la reforma a la demanda. Empero, por razones que desconoce la Sala, el accionante guardó silencio y sólo seis (6) meses después, concretamente el día 15 de marzo de 2022, cuando ya había fenecido la oportunidad de presentar la aludida reforma, la parte actora solicitó que se vinculara como demandado al CONSORCIO ENKI, petición que para entonces resultaba tardía.

Esa extemporaneidad no puede soslayarse o pasarse por alto bajo el matiz de desconocimiento de *derechos sustanciales* del trabajador o las dificultades que apareje el cobro de una eventual condena, pues bajo esa óptica se estaría no sólo desconociendo las formas propias del juicio, sino además permitiéndole a la parte revivir términos ya fenecidos, lo cual resulta absolutamente improcedente.

En los términos señalados, se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada toda vez que en el asunto debatido NO se está en presencia de un litis consorcio necesario, ni se vislumbra una situación de la relación jurídica deprecada, que impida al operador jurídico resolver sobre el fondo del proceso y decidir sobre las pretensiones formuladas por la parte actora. Tampoco se aprecia una afectación a los derechos de las partes, sino, por el contrario, la materialización del derecho al debido proceso que debe imperar en toda actuación judicial.

Se condenará en costas en esta instancia al demandante por NO haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$50.000 a favor de cada una de las sociedades accionadas.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

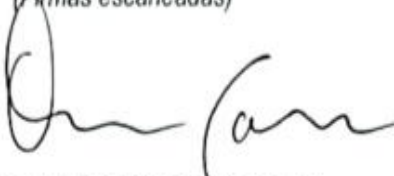
En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE**


PRIMERO: CONFIRMA la decisión proferida el 28 de octubre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, a través de la cual rechazó la intervención de un tercero, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **GUSTAVO ADOLFO MONTOYA CASTAÑO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro.71.878.872, contra las sociedades **CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALIADAS S.A.S. y ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. (E & D S.A.S.)**, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.


SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$50.000 a favor de cada una de las sociedades demandadas.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 014 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 31 DE ENERO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>